

**PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Tutela**

**MATERIA: Tutela de Derechos Fundamentales y otro**

**DEMANDANTE: Juan Sotomayor Chacón**

**DEMANDADO: Gobierno Regional de Antofagasta**

**RUC: 20-4-0243378-8**

**RIT: T-15-2020**

\_\_\_\_\_/

Antofagasta, veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno.

**VISTO:**

**PRIMERO:** Que, ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, se inició esta causa R.I.T. T-15-2020, R.U.C.20-4-0243378-8, seguida por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral y con ocasión del despido; despido injustificado, declaración de relación laboral y cobro de prestaciones, solicitado en procedimiento de tutela mediante demanda interpuesta por don Ramón Miranda Tapia, abogado, domiciliado en esta ciudad, calle teniente Manuel Orella 610 oficina 1303, Antofagasta en representación de don **JUAN SOTOMAYOR CHACON** chileno, cesante, cedula nacional de identidad número 17.656.754-6 domiciliado en calle Pasaje Anacleto Solorza N° 7535, Antofagasta, comuna de Antofagasta seguida contra de **GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA o GORE ANTOFAGASTA**, Rut N° 72.224.100-2, representada por don Marco Díaz Muñoz, Intendente regional o por quien lo represente conforme lo dispone el artículo 4 del Código del Trabajo, todos domiciliados en esta ciudad, Calle Arturo Prat número 384, Antofagasta.

**SEGUNDO:** Que, el actor funda su demanda en que comenzó a prestar servicios para la demandada con fecha 04 de abril de 2018, como Experto para el área de fomento productivo e industria en el gobierno regional de Antofagasta, que prestaba servicios en dependencias de la intendencia, ubicada en calle Arturo Prat 384 de Antofagasta, debiendo asistir diariamente, salvo que su



empleador dispusiera que concurriese a terreno. En cuanto a la naturaleza del contrato, sostiene que el primer contrato suscrito entre las partes correspondía a un contrato a plazo definido con vencimiento el 31 de diciembre de 2018, sin embargo, la sucesiva renovación de contratos de trabajo implica la transformación de la naturaleza de la relación laboral de plazo a indefinido; que su remuneración ascendía a la suma de \$2.400.000.- que su jornada de trabajo era de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a jueves de 08:15 Horas a 17:15 Horas, con 30 minutos de colación diaria no imputable a la jornada. En cuanto al despido, que la relación laboral se mantuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2019, fecha en que se comunicó que con esa fecha se decidió no renovar la contrata. Señala que la carta omite señalar con claridad cuáles son los hechos y el derecho aplicable, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo; y si se establecería que la relación se rige por el Estatuto Administrativo, también la carta adolece de una serie de omisiones, toda vez que es necesario que el acto contenga un razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta la decisión. En cuanto a los hechos que sustentan la vulneración de derechos, que con fecha 16 de abril de 2019, el Gore inició un sumario administrativo en contra del actor, mediante resolución N° 357; el que se inicia por denuncia de doña Fabiola Guerra por presuntas irregularidades en la participación el actor en el proyecto Corfo denominado "semillero de innovación", además del proyecto denominado introducción a la robótica y emprendimiento. Que, la denunciante señala que habiendo participado en la postulación a dichos proyectos su nombre no fue publicado entre los ganadores atribuyendo en ello participación al actor, imputando una infracción a la probidad administrativa y/o conflicto de intereses. Que, iniciado el sumario, el actor procedió a prestar



declaración el 18 de junio de 2019, y que a la fecha aún no se han determinado responsabilidades ni se ha aplicado sanciones. Que, el 12 de agosto de 2019, el Mercurio de Antofagasta procedió a publicar el inicio de sumario al interior del GORE aludiendo supuestas denuncias de cambio de pruebas y complots en el Gore señalando expresamente como involucrados al Sr. Mauricio Muñoz (jefe de División de Administración y Finanzas) y Sebastián Samsó (Profesional del Área de fomento productivo e Industrias), se menciona que Samsó acusó a Muñoz de ejecutar actos alejados a la probidad administrativa, entre los cuales estuvo el cambiar su evaluación, reemplazarla por otro y "maquinar y complotar" para iniciar sumario en contra de otros Funcionario. También se alude que el afectado era Andrés Völker, el cual hasta el mes de Julio era el jefe de la División de Fomento Productivo e Industrias). El día 13 de agosto, el Mercurio de Antofagasta procedió a realizar una segunda publicación aludiendo a los sumarios realizadas al interior del gore. El día 14 de agosto del presente, el diario El Mercurio realizó una tercera publicación en la cual se indicaba la existencia de filtración de información relacionada a los sumarios administrativos en curso al interior del gore, pero esta vez, individualizando al actor con nombre y apellido, sosteniendo que era objeto de un sumario administrativo en el marco de una investigación que afectaba el principio de probidad. Señala que es la denunciada quien filtró o compartió detalles del sumario administrativo, que hasta el momento tiene el carácter de secreto, dando a conocer el nombre del actor como persona acusada de realizar actos que no se condicen con la probidad administrativa. Señala que esta actuación causó daño en la imagen pública del actor, ya que después de esto, el actor ha sido objeto de numerosos rechazos tanto en postulaciones laborales, como en proyectos de negocios en



los que ha participado. Sostiene que la denunciada fue negligente en el cuidado y respeto del principio de privacidad del actor y secreto del sumario administrativo, pues es un hecho público y notorio que el sumario administrativo tanto sus pormenores como declaraciones son de carácter secreta siendo la única excepción a esta regla el afectado y su abogado quienes pueden acceder a esta información cumplidas ciertas etapas del sumario. En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, que se ha vulnerado el derecho a la honra del artículo 19 N° 4, el derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1, ambos de la Constitución Política de la Republica; lo que ocurre tanto durante la relación laboral como con ocasión del despido. Ello, porque la publicación del mes de agosto de 2019, trajo una serie de consecuencias nefastas a la vida del actor circunstancias que a la fecha se mantiene pues la denunciada no ha realizado ninguna medida para paliar o evitar el mal causado. A su vez, el despido del día 31 de octubre del presente es el corolario de una serie de conductas lesivas, viéndose el actor en la obligación de hacer uso de licencia médica, dada la situación de exposición que le afectó emocional y psíquicamente y al reintegrarse a sus funciones la empleadora procedió a desvincularlo consolidando la opinión pública a través de redes sociales, de la veracidad de las imputaciones. Propone como indicios: 1.- La publicación en el diario el mercurio de los días 12 y 13 y 14 de agosto del 2019; 2.- La carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 31 de octubre es coetánea a la publicación efectuada en el diario, existiendo una proximidad de tiempo entre la publicación y el despido; 3. La carta de aviso de termino de contrato de trabajo no establece causa o fundamento alguno del despido lo que hace a lo menos sospechoso el término de la relación contractual en el marco de un sumario



administrativo en curso. Respecto del daño moral, el empleador incurrió en diversos incumplimientos siendo el más grave de ellos, evitar la filtración de la información del sumario administrativo a medios de comunicación social lo que dio lugar a un daño irreparable a la imagen honra del actor, sometiénolo al escarnio público y a diversas funas realizadas por redes sociales, llegando inclusive a las amenazas a su persona y círculo familiar. Que, como víctima de los hechos relatados, el actor ha sido afectada humanamente en su dimensión ética, espiritual y moralmente, lo que le ha provocado angustia, preocupación y estrés por su situación económica y laboral, todo lo cual pudo ser evitado por su ex empleador al haber cumplido con las obligaciones contractuales, por lo que demanda daño moral por la suma de \$30.000.000.- De la modificación unilateral del contrato y no pago de remuneraciones, señala que cuando el actor comenzó a prestar servicios se pactó una remuneración ascendente a \$2400.000.- Posteriormente, con fecha enero de 2019, la demandada procedió a modificar unilateralmente el contrato de trabajo rebajando la remuneración desde enero a marzo de 2019 en \$1.100.000 y luego en abril de 2019 y en adelante hasta el término de la relación laboral en la suma de \$1.500.000.- En cuanto a la demanda subsidiaria, sostiene que el primer contrato suscrito entre las partes se estableció que la fecha de término del mismo correspondería al día 31 de diciembre de 2018 y luego se dictaron sucesivas resoluciones administrativas estableciendo nuevos plazos de contratación; señala que desde el 30 de junio de 2019 y hasta el 07 de octubre de 2019 se mantuvo prestando servicios bajo vínculo de subordinación o dependencia. Señala que un inicio la modalidad de contratación consistía en un contrato de honorarios de suma alzada en el cual se establecía que el actor, tendría la calidad de agente publico quedando en



todo caso, en plena libertad para ejercer labores para terceros y sin estar sujeto a subordinación y dependencia de Gore Antofagasta, no obstante lo que existió fue una prestación de servicios bajo régimen de subordinación y dependencia respecto de Gore Antofagasta pues se daban todos y cada uno de los supuestos del artículo 7 del Código del Trabajo. En cuanto al despido, sostiene que la relación laboral, se mantuvo vigente hasta el día 31 de octubre de 2019, fecha en la que se comunicó que se ha decidido no renovar la contrata. Que, en el régimen contractual que postula la carta no cumple con los requisitos del artículo 162 del Código del Trabajo y desde el punto de vista administrativo la carta adolece de fundamento, por lo que solicita se declare injustificado el despido y se ordene el pago de las prestaciones que indica.

**TERCERO:** Que, la denunciada, previo a contestar la demandada deduce excepción de incompetencia, señala que es un hecho indiscutido que el demandante presta servicios para el Gobierno Regional de Antofagasta, en distintos periodos, de forma interrumpida, y en distintas calidades jurídicas (a honorarios y a contrata) desde el 04 de abril del 2018 hasta el 31 de octubre de 2019, siendo esta última fecha en la que se le comunico, como en derecho corresponde, que "...conforme lo dispuesto en los artículos 146 y 153 del DFL 29/2004 que fija texto refundido y coordinado de la Ley N° 18.378 sobre estatuto administrativo el Intendente Regional que suscribe ha decidido no renovar su designación a contrata profesional grado 09 EUR. Que, en su calidad de funcionario el actor está sujeto al Estatuto Administrativo y a la ley N° 19.175, que según se ha indicado que corresponde a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En este sentido, el régimen estatutario es de carácter legal, ya que es la ley que regula la situación de los funcionarios y 3 señala la forma en que nace la



relación con el Estado, esto es, a través del respectivo nombramiento en el cargo. Añade que el Gobierno Regional de Antofagasta, se encuentra excluido de la regulación laboral, toda vez que se encuentra sometido a un estatuto especial como lo es el administrativo, por lo que solicita se declare la incompetencia del tribunal para conocer los hechos denunciado. En cuanto a la contestación, solicita el rechazo de la demanda, niega y controvierte los hechos en ella contenidos; que es efectivo que el actor comenzó trabajar para el Gobierno Regional con fecha 04 de abril de 2018. En esa oportunidad, se celebró con él un contrato de honorarios a suma alzada, que tendría como vigencia del 03 de abril al 31 de diciembre de 2018. En ese entonces, la remuneración que percibía era de \$ 2.200.000.- Luego, paso a ser un funcionario a contrata, grado 10° E.U.R. ingresando al servicio con fecha 07 de enero de 2019 y hasta el día 30 de abril de 2019, por resolución de nombramiento N° 804/3/2019, por lo que prestó servicios de manera ininterrumpida, que los días que van del 01 al 06 de enero de 2019, este se encontraba de vacaciones en Brasil; siendo inverosímil su relato. Que el inicio del periodo a contrata es el 07 de enero de 2019. Añade que todos los profesionales a contrata que ingresan al Gobierno Regional de Antofagasta, lo hacen de forma transitoria pasando a formar parte de la dotación de la institución, y en virtud de las necesidades del Servicio se disponen los cambios que sean necesarios para efecto de dar eficiencia y eficacia en el desempeño de la función pública. Que luego su contrata fue prorrogada en diversas oportunidades y que no existió periodo en que el actor prestara servicios sin contrato de honorarios o nombramiento a contrata, sosteniendo que no existió relación laboral como lo sostiene el actor. En cuanto al despido, que el vínculo del actor se mantuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2019, señala que no al no



existir relación laboral entre las partes no existe obligación de entregar carta aviso de despido; añade que lo que el Gobierno regional hizo, fue entregar al actor una comunicación en la que comunicaba que su contrata no sería renovada, no existiendo obligación de hacerlo. En cuanto a la supuesta vulneración de derechos, señala que a la época de las publicaciones a que refiere el actor en su demanda existía un sumario administrativo por la eventual responsabilidad administrativa que pudiera haberle correspondido al señor Sotomayor, cuyos antecedentes son reservados. Señala que los dichos en el Diario El Mercurio son de su exclusiva responsabilidad que el Gobierno Regional de Antofagasta es riguroso y guarda con celo toda la información relativa a la práctica de sumarios a sus funcionarios, y desmiente que cualquier detalle de los mismo pudiese haber sido filtrado a dicho medio de comunicación o cualquier otro. Que, tal divulgación, no es de responsabilidad de esa denunciada. Que, el sumario es secreto y no se ha divulgado de forma alguna su existencia, ni menos los antecedentes en ellos contenidos. En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, desconoce todo tipo de responsabilidad al respecto; que las publicaciones y su contenido son responsabilidad de quien las emitió, y rechazan que la información ventilada provenga de esa parte. Señala que dicha filtración no fue pasada por alto y hoy es objeto de un sumario administrativo, ordenada por resolución exenta N° 001308 con fecha 28 de octubre de 2019. En cuanto a los supuestos indicios, señala que la denuncia no aporta indicios verdaderos, que no existe certeza, sino solo conjeturas, infundadas de que las noticias publicadas fueron por la irresponsabilidad de esa parte, se debe desestimar tales indicios. Respecto del daño moral, señala que son incompatibles las indemnizaciones que contempla el artículo 489 del Código del Trabajo y la indemnización del daño moral en





aplicación del artículo 1556 del código Civil. Que las indemnizaciones del artículo 489 del Código del Trabajo, ya contemplan una naturaleza resarcitoria de los perjuicios provocados, por ende, acumularla con una eventual indemnización de perjuicios por daño moral la desnaturaliza y contribuiría a que se generase un enriquecimiento sin causa, que por lo demás sería improcedente en este caso, puesto que los hechos que se imputan no son responsabilidad de esa parte. Respecto a la supuesta modificación unilateral de contrato, señala que ello no es efectivo que la situación descrita por el actor en su demanda obedece a la variación contractual a que estuvo sujeto el actor primero como honorarios y luego como funcionario a contrata. En cuanto a las prestaciones demandadas, señala que son improcedentes; en cuanto al feriado este fue debidamente otorgado y en el periodo 07 de enero al 31 de octubre de 2019, no le corresponde feriado legal. Sostienen además que la posibilidad de solicitar el feriado se agota una vez que expira su relación contractual.

**CUARTO:** Que, evacuando el traslado conferido, la denunciante solicita su rechazo sobre la base de dos argumentos, el primero, que en la denuncia lo que se solicita junto con el resto de las acciones de carácter constitucional es la declaración que en la práctica lo que existía era una relación de carácter laboral, por lo que no podría acogerse la excepción de incompetencia en este estadio procesal puesto que necesita tener a la vista todos los antecedentes que necesariamente deberán rendirse en la secuela del juicio para determinar si efectivamente hay una relación laboral y solo en el evento de no acogerse dicha solicitud, se podrá analizar si se acoge o no la excepción de incompetencia; el segundo argumento, en atención a lo establecido por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 37.905-2017, en la que señala que si bien el artículo 1° del Código del



Trabajo excluye la aplicación de las normas del estatuto Administrativo del Código del Trabajo, consagra una contra excepción y esta dice relación con que se podrá conocer por el respectivo tribunal del trabajo todas aquellas materias que no estén expresamente reguladas en el Estatuto Administrativo y como la vulneración de derechos fundamentales establecidas en los artículos 485 y 489 del Código del Trabajo, no se encuentran reguladas en dicho estatuto, compartiendo esa parte los argumentos vertidos en dicha sentencia, por lo que solicita el rechazo de la excepción de incompetencia en todas sus partes.

**QUINTO:** Que, con fecha siete de febrero del año dos mil veinte, se efectuó la audiencia preparatoria no prosperando el llamado a conciliación, se recibió la causa a prueba y se fijó como hechos a probar: **1°** Existencia de relación laboral entre las partes, elementos que la configuran y antecedentes. **2°** Hechos e indicios de la vulneración de derechos denunciada. **3°** En su caso monto de las remuneraciones pactadas para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo. **4°** Procedencia del feriado proporcional demandado, monto. **5°** Efectividad que se adeudan remuneraciones, monto. **6°** Procedencia del daño moral intentado.

**SEXTO:** Que, con fecha once de noviembre del año dos mil veinte y veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, se efectuó la audiencia de juicio, en la que las partes para acreditar sus dichos incorporaron sus medios de prueba, al efecto el demandante incorporó los siguientes medios de prueba, **a) documental:** **1.** Contrato de honorarios a suma alzada de fecha 04 de abril de 2018. **2.** Resolución número TRA 804/39/2018 de fecha 25 de mayo de 2018 emitida por el servicio administrativo del gobierno regional de Antofagasta. **3.** Resolución número TRA 804/19/2019 de fecha 18 de marzo de 2019 emitida por el servicio administrativo del gobierno regional de



Antofagasta. **4.** Resolución número TRA 804/19/2019 de fecha 20 de mayo de 2019 emitida por el servicio administrativo del gobierno regional de Antofagasta. **5.** Resolución número RA 804/609/2019 de fecha 21 de agosto de 2019 emitida por el servicio administrativo del gobierno regional de Antofagasta. **6.** Resolución numero RA 804/723/2019 de fecha 07 de octubre de 2019 emitida por el servicio administrativo del gobierno regional de Antofagasta. **7.** Liquidaciones de sueldo periodo enero a septiembre de 2019. **8.** Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 29 de octubre de 2019 emitida por Edgard Blanco Rand Intendente Antofagasta. **9.** Resolución exenta número 000357 de fecha 26 de abril de 2019 emitida por marco Antonio Días Muñoz Intendente Antofagasta. **10.** Publicación de fecha 12 de agosto de 2019 emitida por el diario el mercurio de Antofagasta. **11.** Publicación de fecha 13 de agosto de 2019 emitida por el diario el mercurio de Antofagasta. **12.** Publicación de fecha 14 de agosto de 2019 emitida por el diario el mercurio de Antofagasta. **13.** Publicación diario electrónico YO Soy Antofagasta de fecha 13 de agosto de 2019. **14.** (desistido) **15.** Publicación de fecha 25 de octubre de 2018 y que se refiere al demandante de autos. **16.** (desistido) **17.** Publicación efectuada en el portal de transparencia de gore en el cual se indica la remuneración bruta del actor de 2.400.000. **18.** Sentencia rol 37905-2017 emitido por la Excma. corte suprema **b) confesional:** 1.- Edgar Blanco Raid, no comparece, solicita se haga efectivo apercibimiento. **c) testimonial:** 1.- Andrés German Volker Rojas, 2.- Karen Jasmine Christie Christie, registro de tales declaraciones se mantienen en audio. **d) Exhibición de documentos:** 1. Liquidaciones de sueldo de periodos abril de 2018 a octubre de 2019. Solo exhibe 2019. Se tiene por cumplido parcial solicita se haga efectivo apercibimiento por las no presentadas. 2. Contrato de trabajo u honorarios y



anexos celebrados durante la relación contractual. Exhibe. **3.** Resoluciones administrativas que se pronuncien respecto a la contratación del denunciante durante los periodos abril de 2018 a octubre de 2019. Exhibe **4.** Sumario administrativo ordenado por resolución exenta 00357 de fecha 26 de abril de 2019. No exhibe artículo 137 inciso 2° y no se ha concluido. Solicita se tenga por cumplido.

Que, en su oportunidad la denunciada incorporó los siguientes medios de prueba, **a) documental:** **1.** Curriculum Vitae de don Juan Sotomayor Chacón. **2.** Contrato a Honorario a Suma Alzada de fecha 04 de abril de 2018 entre Gobierno Regional de Antofagasta y don Juan Sotomayor Chacón. **3.** Resolución Exenta N°804/39/2018 de fecha 03 de mayo de 2018 donde se aprueba contrato a honorarios a suma Alzada de don Juan Sotomayor Chacón. **4.** Declaración jurada de fecha 07 de enero de 2019, firmada por don Juan Sotomayor Chacón. **5.** Resolución Exenta TRA N°804/3/2019 de fecha 14 de enero de 2019 donde se dispone la contrata de don Juan Sotomayor Chacón desde 07 de enero 2019 hasta el 30 de abril de 2019. **6.** Resolución Exenta TRA N°804/19/2019 de fecha 18 de marzo de 2019 donde se dispone la contrata de don Juan Sotomayor Chacón hasta el 30 de abril de 2019. **7.** Resolución Exenta RA N°804/345/2019 de fecha 20 de mayo de 2019 donde se dispone la prorroga contrata de don Juan Sotomayor Chacón hasta el 30 de junio de 2019. **8.** Resolución Exenta RA N°804/553/2019 de fecha 10 de julio de 2019 donde se dispone la prorroga contrata de don Juan Sotomayor Chacón hasta el 30 de septiembre de 2019. **9.** Resolución Exenta RA N°804/723/2019 de fecha 07 de octubre de 2019 donde se dispone la prorroga contrata de don Juan Sotomayor Chacón hasta el 31 de octubre de 2019. **10.** Resolución Exenta N°001317 de Gobierno Regional de Antofagasta, de fecha 29 de octubre de 2019, que dispone la no prorroga de contra de don Juan Sotomayor Chacón **11.** Carta de fecha 29 de



octubre 2019, enviada por sr. Intendente Edgar Blanco Rand a don Juan Sotomayor Chacón. **12.** Resolución Exenta N°001309 de Gobierno Regional de Antofagasta, de fecha 28 de octubre de 2019, que aprueba nuevo protocolo de prevención y denuncia de situaciones de maltrato laboral, acoso laboral y sexual del Gobierno Regional de Antofagasta. **13.** Resolución Exenta N°000357 de Gobierno Regional de Antofagasta, de fecha 26 de abril de 2019, que dispone la instrucción de sumario administrativo y designa fiscal, contra don Juan Sotomayor Chacón. **14.** Resolución Exenta N°001308 de Gobierno Regional de Antofagasta, de fecha 28 de octubre de 2019, que dispone la instrucción de investigación sumaria y designa investigador, por requerimiento efectuado por el Senador Pedro Araya Guerrero. **15.** Correo electrónico de fecha 01 de abril de 2019, enviado por la encargada de remuneraciones doña Alejandra Serrano Zárate, a don Juan Sotomayor Chacón, como asunto diferencias. **16.** Desglose de remuneraciones de don Juan Sotomayor Chacón, por cambio de planta de grado 10° a grado 9° a contar del 07 de enero de 2019. **17.** Liquidación de remuneraciones de enero a octubre de 2019. **18.** Registro de asistencia de enero a octubre de 2019. **19.** Resolución exenta (R.R.H.H) n°2556 de fecha 30 de septiembre de 2019, por goce de licencia médica del 30/09/2019 al 29/10/2019, con la copia de licencia médica y la determinación de base de cálculo subsidio de licencia médica. **20.** Resolución exenta (R.R.H.H) n°2333 de fecha 02 de septiembre de 2019, por goce de licencia médica de 03/09/2019 al 12/09/2019, con la copia de licencia médica y la determinación de base de cálculo subsidio de licencia médica. **21.** Resolución exenta (R.R.H.H) n°2269 de fecha 27 de agosto de 2019, por goce de licencia médica del 27/08/2019 al 02/09/2019, con la copia de licencia médica y la determinación de base de cálculo subsidio de licencia médica. **22.** Resolución exenta (R.R.H.H) n°2163



de fecha 12 de agosto de 2019, por goce de licencia médica del 13/08/2019 al 26/08/2019, con la copia de licencia médica y la determinación de base de cálculo subsidio de licencia médica. **23.** Copia de Sentencia del Excelentísimo Tribunal Constitucional de fecha 06 de diciembre del 2018, en causa Rol N°3853-17-INA. **24.** Copia sentencia causa ROL 1292-2018, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en la causa de Protección seguida ante el Gobierno Regional. **25.** Copia sentencia causa rol Protección N° 4310-2019, de la Excelentísima Corte Suprema, caratulado "MUÑOZ con GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA" **b) confesional:** Juan Manuel Sotomayor Chacón, **c) Testimonial 1.-** Carolina del Carmen Olivares Carmona, **2.-** Lorena Andrea Cortes Jopia, **3.-** José Enrique Díaz Valenzuela, registro de tales declaraciones se mantienen en audio. **d) Oficios: 1.** Policía Internacional de la PDI.

**SEPTIMO: En cuanto a la excepción de incompetencia.** Que, la demandada ha opuesto excepción de incompetencia absoluta respecto de la acción de vulneración de derechos fundamentales intentada por el actor, en atención a que no serían aplicables las normas del párrafo 6°, Título 1° del Libro V del Código del Trabajo, en atención a que el demandante fue contratado por esa demandada a través de contratos a honorarios y a contrata, por lo que en su calidad de funcionario, está sujeto al Estatuto Administrativo y a la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, por lo que no se aplicaría en la especie la normativa laboral.

**OCTAVO:** Que, con fecha treinta de enero de 2020, el Gobierno Regional deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso tercero y del artículo 485, ambos del Código del Trabajo, el que fue acogido con fecha 04 de junio del año 2020, declarándose que los artículos 1°, inciso tercero y 485



del Código del Trabajo resultan contrarios a la Constitución Política de la República y, por tanto no podrán ser aplicados en los autos caratulados "Sotomayor con Gobierno Regional de Antofagasta" Rit T-15-2020.

**NOVENO:** Que, se debe tener presente, que con fecha 09 de noviembre del año 2020 se publicó la ley 21.280, que interpretó el artículo 485 del Código del Trabajo, estableciendo que las normas contenidas en el párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo son aplicables a todos los trabajadores incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo.

**DECIMO:** Que, como lo ha señalado la doctrina, si bien las leyes procesales rigen in actum, lo que significa que prevalecen sobre la antigua desde su entrada en vigor, la aplicación inmediata del artículo 485 del Código del Trabajo interpretado se haría improcedente en la especie puesto que se trata de un proceso pendiente iniciado bajo el amparo de una normativa distinta.

**UNDECIMO:** Que, por todo lo anterior, se hace necesario que este tribunal se pronuncie respecto de la excepción interpuesta, y al respecto se debe tener presente, tal como lo sostiene la denunciante al evacuar el traslado conferido que no se puede perder de vista que el objeto del juicio radica en establecer la real naturaleza de la vinculación que unió a las partes, la existencia de vulneración de derechos fundamentales y un eventual despido y el cobro de indemnizaciones, materias todas que son competencia de este Juzgado del Trabajo en atención a lo dispuesto en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo, que establece que son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, "las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores



por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

**DUODECIMO:** Que, el problema se suscita en caso que se establezca que no une a las partes una relación de origen laboral, toda vez que en ese caso no podría razonarse, como se ha hecho hasta ahora, aplicando los artículos 1° y 485 del Código del Trabajo, ya que se han declarado inaplicables en la especie por el Tribunal Constitucional, lo que significa que esta sentenciadora no puede aplicar en este proceso los referidos preceptos, pero por el deber de inexcusabilidad, debe de todas formas resolver el caso concreto con aquellas normas no excluidas, así lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, como es el caso de la sentencia 37.905-2017 de fecha 19 de diciembre de 2019.

**DECIMO TERCERO:** Que, en consecuencia en atención a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, del que emana el derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, el derecho a recabar del Estado, la protección jurídica debida, conforme al cual el actor recurre ante este Juzgado del Trabajo y solicita se declare que con motivo de la filtración del sumario existente en su contra se ha vulnerado su derecho a la honra del artículo 19 N° 3 y su derecho a la Integridad psíquica y física del N°1, del mismo artículo 19 de la Constitución Política de la República, este tribunal del Trabajo debe necesariamente pronunciarse a su respecto.

**DECIMO CUARTO:** Que, como lo sostiene la sentencia 37.905-2017 ya citada, el procedimiento de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales en el específico ambos del desempeño de labores bajo vínculo





de subordinación y dependencia, derechos que están reconocidos a todas las personas por la Constitución Política de la República.

**DECIMO QUINTO:** Que, no se puede perder de vista que el artículo 5° del Código del Trabajo establece que "las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieren afectar la intimidad, la vida privada o la honra de estos".

**DECIMO SEXTO:** Que, si bien el procedimiento de tutela comienza con el catálogo de derechos protegidos contenidos en el artículo 485 del Código del Trabajo, su aplicación ha sido excluida por el Tribunal Constitucional; sin perjuicio los artículos siguientes 486 y 489 del mismo cuerpo legal, establecen que podrá accionar cualquier trabajador u organización sindical, que invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados sus derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones jurídicas cuyo conocimiento corresponde al jurisdicción laboral.

**DECIMO SEPTIMO:** Que, como ha dicho la jurisprudencia, "que en un contexto público, la vinculación estatutaria de una persona natural con un órgano de la Administración del Estado, puede entenderse como compatible con el concepto de trabajador" al que alude el artículo 486 antes citado, entendiendo por tal a la persona natural que presta servicios personales para una persona natural o jurídica que utiliza dichos servicios intelectuales o materiales, por lo que se hace aplicable lo dispuesto en el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo que otorgaría competencia a este tribunal, por lo que se debe rechazar la excepción opuesta.

**DECIMO OCTAVO:** En cuanto a la naturaleza de la vinculación existente entre las partes. Que, el artículo séptimo del Código del Trabajo, establece, que "contrato



individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”.

**DECIMO NOVENO:** Que, este acuerdo de voluntades se perfecciona por el solo consentimiento de las partes en los servicios a prestar y en la remuneración que se pagará por el mismo. Así las cosas, y virtud del principio de primacía de la realidad, el legislador dispone en el artículo 8°, que estaremos en presencia de un contrato de trabajo, cuando concurran los supuestos del referido artículo séptimo.

**VIGESIMO:** Que, no es un hecho controvertido, que el denunciante prestó servicios para el Gobierno Regional de Antofagasta, y de la prueba incorporada se puede observar que comenzó prestando servicios a través de un contrato a Honorarios a suma alzada con fecha 04 de abril de 2018, en calidad de Experto para el área de Fomento productivo e Industria en el Gobierno Regional de Antofagasta, que este contrato tuvo una duración entre el 03 de abril al 31 de diciembre de 2018, aprobado mediante Resolución Exenta N° TRA 804/39/2018 de fecha 25 de mayo de 2018.

**VIGESIMO PRIMERO:** Que, posteriormente, el actor continúa prestando servicios en calidad de contrata según aparece de la resolución TRA N° 804/03/2019 de fecha 14 de enero de 2019, que esta contrata se extendió entre el 07 de enero de 2019 y hasta el 30 de abril de 2019; que mediante Resolución TRA N° 804/19/2019 de fecha 18 de marzo de 2019, se designa a contrata como profesional Grado 09 a contar del 07 de enero de 2019, aumento de grado solicitado por el Intendente de la época.

**VIGESIMO SEGUNDO:** Que, mediante Resolución TRA N° 804/345/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, se prorrogó la contrata del actor por el periodo 01 de mayo de 2019 al 30 de junio de 2019; que mediante resolución Exenta RA



804/553/2019 de fecha 10 de julio de 2019 por el periodo 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 y posteriormente mediante resolución Exenta RA N° 804/723/2019 de fecha 07 de octubre de 2019 se prorrogó la contrata por el periodo 01 de octubre de 2019 al 31 de octubre de 2019.

**VIGESIMO TERCERO:** Que, mediante Resolución Exenta N° 001317 de fecha 29 de octubre de 2019, el Gobierno Regional dispone la no renovación de la contrata, por lo que la misma expira el 31 de octubre de 2019, lo que fue comunicado mediante carta firmada por el Intendente de la época Edgard Blanco Rand con fecha 29 de octubre de 2019.

**VIGESIMO CUARTO:** Que, en consecuencia se ha podido establecer que el actor prestó servicios para la denunciada en un periodo que va desde 03 de abril de 2018 y hasta 31 de octubre de 2019, en un primer periodo a través de un contrato de honorarios y el segundo año a través una designación a contrata y sus sucesivas prórrogas hasta el 31 de octubre de 2019, sin que exista algún periodo en que el actor hubiere prestado servicios sin ningún tipo de contrato, toda vez que con el informe policial N° 20210060393/00237/90 de fecha 09 de febrero de 2021, el actor en el periodo 22 de diciembre de 2018 y el 06 de enero de 2019, se encontraba en Brasil.

**VIGESIMO QUINTO:** Que, al integrar la Gobernación Regional la Administración del Estado, se les hace aplicable a sus funcionarios lo dispuesto en el artículo 15 del D.F.L. N°1/19.653, esto es, que el personal de la Administración del Estado, se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en consecuencia, el régimen jurídico al que se encuentran sometidos los funcionarios públicos lo constituye el Estatuto Administrativo -ley N° 18.834- tal como lo expresa el artículo 1° del referido cuerpo legal.

**VIGESIMO SEXTO:** Que, conforme lo disponen los artículos 4° y 11° del Estatuto, un cargo público se



puede desarrollar como un empleo de planta o contrata, en calidad de titular, como suplente o subrogante, en este caso los funcionarios se rigen íntegramente por el Estatuto Administrativo; no obstante, el artículo 11° también dispone la contratación de ciertos profesionales en calidad de contrato a honorarios, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución o la contratación para cometidos específicos. Que, el referido artículo 11° establece que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de ese Estatuto.

**VIGESIMO SEPTIMO:** Que, si bien los testigos de la denunciante Andrés Volker y doña Karen Christie Christie, sostienen que el actor cumplía horario, debía registrar asistencia y debía rendir cuenta de su gestión, ello no necesariamente lo transforma en un contrato de trabajo, toda vez que de acuerdo al Título III del Estatuto Administrativo los funcionarios están sujetos a obligaciones funcionarias y en el artículo 61, letras d y f, respectivamente dispone la obligación de los funcionarios de cumplir horarios y cumplir instrucciones; por su parte el artículo 65 del mismo Estatuto establece que la jornada de trabajo de los empleados públicos es de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.

**VIGESIMO OCTAVO:** Que, en consecuencia, se ha podido establecer que el denunciante se desempeñó para el Gobierno Regional por menos de dos años en dos calidades distintas, la primera a través de un contrato a honorarios que duró un año y la segunda a través de sucesivos nombramientos a contrata que no se extendieron más allá de octubre del año 2019, por lo que no existe algún elemento en la prueba que permita determinar que la prestación de servicios del actor se hubiera llevado a efecto fuera del marco legal que amparó su contratación,



por lo que no se acreditó que la vinculación que unió al denunciante y al Gobierno Regional fuera de carácter laboral sino que conforme al Estatuto Administrativo, debiendo rechazar la demanda en ese aspecto.

**VIGESIMO NOVENO:** En cuanto a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Que, el artículo 5° del Código del Trabajo establece que “el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada y la honra de estos”. Que, esta norma tiene su aplicación en lo dispuesto en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

**TRIGESIMO:** Que, el actor denuncia, que con ocasión de la filtración del sumario administrativo de que es objeto, se vulneró las garantías el derecho a la honra artículo 19 numeral 4 de la constitución política de la República) y el derecho a integridad física y psíquica del trabajador (Artículo 19 numeral 1 de la constitución política de la república), esto durante la vinculación que unió a las partes y a propósito de su término.

**TRIGESIMO PRIMERO:** Que, no es un hecho controvertido que el denunciante fue objeto de un sumario administrativo, el que se dispuso con fecha 26 de abril de 2019, mediante Resolución Exenta 000357 y ello en atención a la denuncia efectuada con fecha 08 de abril del año 2019 por doña Fabiola Guerra, “referida a la postulación y adjudicación de proyectos por parte de don Juan Sotomayor Chacón a líneas de financiamiento de a Corporación de Fomento Productivo, siendo funcionario dependiente de Andrés Völker, quien a su vez preside el cuerpo colegiado que aprueba o no los proyectos”.

**TRIGESIMO SEGUNDO:** Que, tampoco es un hecho controvertido que la existencia de ese sumario se filtró a la prensa así lo sostienen los testigos de la denunciante Andrés Völker Rojas y Karen Christie



Christie, quienes manifiestan que el sumario se filtró a la prensa y se publicó esa información sosteniendo que el actor había faltado a la probidad; que por su parte la testigo de la denunciante Lorena Andrea Cortes Jopia, sostiene que supo de la existencia del sumario por la prensa; por su parte don José Díaz Valenzuela, designado como fiscal, por el Intendente de la época también sostiene que tomó conocimiento de la filtración del sumario, pero no sabe cómo ocurrió, ya que la información se encontraba en la caja de Fondos.

**TRIGESIMO TERCERO:** Que, el actor incorporó un set de publicaciones de prensa, principalmente del Diario el Mercurio de Antofagasta, de fechas 12, 13 y 14 de agosto de 2019, que en esta última publicación se menciona al demandante y la publicación sostiene que en este segundo sumario se sigue en contra de Völker y Sotomayor "y se investiga la adjudicación de financiamiento de Corfo a un proyecto de desarrollo tecnológico en colegio desarrollado por la empresa Raidbotics que cuenta con tres socios entre ellos, Juan Sotomayor"; y añade que la duda surge debido a que el Comité de selección fue presidido por Völker, quien de esta forma habría favorecido a uno de sus funcionarios asesores.

**TRIGESIMO CUARTO:** Que, conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa.

**TRIGESIMO QUINTO:** Que, el artículo 119 del Estatuto Administrativo, establece que los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.



**TRIGESIMO SEXTO:** Que, en definitiva al publicarse en el Diario El Mercurio de Antofagasta la existencia del sumario Administrativo, los motivos que lo originan, mientras aún se encuentra vigente la investigación sin determinar responsabilidades del actor, efectivamente se vulneró el derecho a la honra del demandante, puesto que vio dañada su imagen frente a la opinión pública, así lo expresa en audiencia Andrés Vólker, "que las publicaciones afectaron a don Juan", que "con este tipo de noticias se pierde la confianza y pesa al buscar otro trabajo."

**TRIGESIMO SEPTIMO:** Que, el actor al prestar declaración en audiencia sostiene que con la filtración del sumario se sintió "apuntado con el dedo" por haber cometido un crimen, que al proyecto se le cerró las puertas y "aún no se ha probado nada". Sostiene que no sabe quién divulgó la información, nadie tenía conocimiento del Sumario.

**TRIGESIMO OCTAVO:** Que, es el jefe Superior del servicio quien ordena el inicio del sumario administrativo y quien designa al Fiscal instructor, en consecuencia es en este caso, es quien debe resguardar el secreto del sumario y velar porque no se vulneren los derechos de los funcionarios, lo que en este caso no aconteció, porque el sumario se filtró a la prensa, la investigación en curso, no ha arrojado resultados; que por lo demás, la autoridad administrativa decidió no renovar la contrata del actor a su vencimiento, sin mayores fundamentos más que los contemplados en la letra f) de la Resolución Exenta 001317 de 29 de octubre de 2019, lo que unido al sumario que se sigue en su contra aumenta la duda que se cierne sobre la probidad del funcionario afectando aún más su honra.

**TRIGESIMO NOVENO:** Que, en cuanto a la afectación a la integridad síquica del actor, según los medios de prueba que incorporó la denunciada el actor hizo uso de



licencia médica desde el 12 de agosto de 2019 y hasta octubre del mismo año, las que no fueron otorgadas por profesionales asociados a la salud mental; sin perjuicio de lo anterior el actor incorpora un informe psicológico que da cuenta de un estado ansioso-depresivo evacuado por una profesional psicóloga, de quien no se acredita su calidad de perito, por lo que no es suficiente para establecer la afectación psicológica que reclama; pero si se puede advertir que luego de la exposición mediática en la que se vio envuelto dada la filtración del sumario, su vida se vio trastocada, no volvió a trabajar, luego no se le renovó la contrata, lo que podría afectar a cualquier persona que se viera envuelta en una situación semejante lo anterior, unido a la vulneración al derecho a la honra, llevan a acoger la demanda en los términos que en lo resolutivo de esta sentencia se dirá.

**CUADRAGESIMO: En cuanto a las prestaciones demandadas.** A) En cuanto al daño moral demandado, que como se ha podido establecer precedentemente, la vulneración de derechos que se ha acreditado se produjo vigente la relación laboral, ello relacionado con lo dispuesto en el artículo 495 N° 3 del Código del Trabajo, que establece que la sentencia deberá contener la indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor, entre ellas las indemnizaciones que procedan, se hace aplicable la indemnización por daño moral solicitada en el quantum que en lo resolutivo se dirá.

**CUADRAGESIMO PRIMERO:** B) En cuanto al no pago de remuneración, que el actor sostiene que la denunciada mantiene una deuda de remuneraciones por una modificación unilateral por parte de su empleador, no obstante debe recordarse que no se acreditó la existencia de relación laboral entre las partes, por lo que tampoco se acreditó la mentada modificación unilateral de lo pactado, por lo que dichas diferencias se producen asociadas a las





sucesivas designaciones a contrata y los grados asociados a ella, por lo que no se probó que esas prestaciones se adeuden; que, por lo demás, no forman parte de la denuncia de vulneración de derechos intentada por lo que este tribunal no tiene competencia para pronunciarse de ella, por lo que se rechazará la demanda en esa parte.

**CUADRAGESIMO SEGUNDO: En cuanto a los demás antecedentes allegados a los autos.** Que toda la prueba rendida e incorporada en este juicio por las partes ha sido analizada y valorada de conformidad a las reglas de la sana crítica, no alterando aquella no mencionada en nada lo resuelto en el presente fallo pues la misma ha devenido en sobreabundante en relación a hechos que se han tenido como suficientemente establecidos en este juicio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5 a 11, 21, 22, 34, 35, 41, 42, 44, 54 a 58, 67, 73, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 168, 172, 173, 178, 184, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 y 485 a 495 del Código del Trabajo;

Se declara:

**En cuanto a la excepción**

I.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia opuesta por la denunciada.

**En cuanto al Fondo**

I.- Que, **se acoge** la demanda de vulneración de derechos fundamentales vigente la vinculación, interpuesta por don Ramón Miranda Tapia, abogado, en representación de don **JUAN SOTOMAYOR CHACON**, dirigida en contra de **GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA**, representada por el Intendente Regional, todos ya individualizados, en consecuencia se declara que con el actuar de la denunciada se vulneró el derecho a la honra del denunciante, contemplada en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debiendo la



demandada pagar al actor la suma de \$15.000.000.- a título de indemnización por daño moral.

**II.-** Que, **se rechaza** la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones.

**III.-** Que, cada parte pagará sus costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

**R.U.C. 20-4-0243378-8**

**R.I.T. T-15-22020**

**Dictada por doña Yohana María Chávez Castillo, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.**

En Antofagasta, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente y se remitieron los correos electrónicos a las partes.

